

Chía, Abril 6 de 2026

Señores:

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección: Calle 9 No. 8 – 31

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

soytransparente@mincultura.gov.co

Bogotá

REF.- DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Respetados Señores:

El artículo 23 de la Constitución Política, señala:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

El artículo 209 de la Constitución Política, señala:

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Concordancias

“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

El artículo 55 de la Ley 190 de 1995, señala:

“Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo”.

La Ley 1755 del 30 de junio de 2015, señala:

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.*

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir

información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.*

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información *deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. (...)*

Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. *Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación. (Negrilla fuera del texto original)*

En mérito de lo anteriormente expuesto,

HERNANDO QUINTANA CAMACHO, ciudadano en ejercicio, mayor de edad, residenciado en el Municipio de Chía, Cundinamarca en la Carrera 12 No. 10-66 Piso 3, e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.397.663 expedida en Chía, Cundinamarca, en mi calidad de Ciudadano, atendiendo mi responsabilidad de colaborar y velar porque se logre obtener tranquilidad y bienestar a mi comunidad en general, en especial en la atención de nuestros ciudadanos, en el reconocimiento de sus derechos, la intervención su Entidad y su responsabilidad como funcionarios encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para responder lo que aquí invoco con urgencia; y en el ejercicio del **DERECHO DE PETICIÓN**, consagrado en las normas anteriores; presento Petición respetuosa a ustedes por motivos de interés general.

OBJETO DE LA PETICIÓN

Estimo que es legal y conveniente atender y hacer llegar a Ustedes el requerimiento general para que ordenen inmediatamente a quienes corresponda en el nivel nacional con el fin de permitir la intervención de la Entidad y su responsabilidad como funcionarios competentes

encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para responder el asunto que aquí invoco con urgencia para absolver dudas que coadyuven en el proceso de cumplimiento de las normas que adelante señalo para todos los Entes Territoriales por lo que pudiera interpretarse como clara violación de las normas legales frente a las siguientes:

CONSIDERACIONES DE HECHO

Que, los mandatarios Nacionales, Departamentales, Distritales y/o Municipales, al igual que las Corporaciones Públicas del nivel nacional han venido a través de los años de manera continuada ejerciendo la entrega de ejecución de sus periodos con la colocación indiscriminada de placas o leyendas destinados a recordar su participación como funcionarios en ejercicio, y demás acciones que pudieran considerarse van en contra de las normas legales, sin que exista una Ley que así los autorice.

Que, es deber de los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal y de la ciudadanía en general fomentar en las actuales generaciones la gratitud y veneración a los grandes valores humanos que en el pasado contribuyeron a formar y a dar carácter a la nacionalidad colombiana y que dicho objetivo se logra con excepcional oportunidad consagrando a la memoria de esos grandes calores históricos las instituciones oficiales que se han dedicado al bien público y **a la formación y difusión de la cultura**; por lo tanto, se debe mantener el respeto por los monumentos, emblemas, símbolos que enaltezcan nuestra propia historia, sancionar a los infractores y ordenar el retiro y la utilización de nombres extraños y/o rebuscados que no dan significado a nuestra propia historia en las Instituciones Oficiales establecidas para el bien público y **para la formación y difusión de la cultura**; con nombres que por el contrario perpetúen la memoria de los grandes hombres desaparecidos o de los acontecimientos que hayan contribuido a la formación de la nacionalidad colombiana.

Que, no obstante, el Decreto 1678 de 1958 ha sido suficientemente claro a través de los años en señalar también la prohibición existente de colocar en las oficinas públicas retratos de los funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente **se pueda interpretar como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas o dichos funcionarios**. Y que solo es permisivo la colocación de efigies de próceres o, cuando así lo haya dispuesto la ley, la de personas ilustres desaparecidas.

Que, en atención a las normas traídas a colación, determinan para el espacio y bienes de uso público, incluidos sitios y obras de propiedad de las entidades, el debido cumplimiento de lo ordenado para denominar los mismos en carácter de reconocimiento, prohibiéndose la designación a personas vivas o funcionario públicos en ejercicio, incluso el Presidente de la República, **extendiéndose a la disposición de retratos, placas, leyendas o monumentos que recuerden la participación de los mismos o su reminiscencia**, salvo las excepciones que de manera taxativa exponen las normas citadas y que han sido claramente expuestas en el **Memorando 10 de 2020 (ANEXO)**, de Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales.

Que, Es preciso señalar, que la Procuraduría General de la Nación, sus Procuradurías Delegadas y Territoriales, al igual que sus funcionarios, como órgano de control no coadministra la gestión pública; pero, la PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES, en atención a las funciones adscritas, tiene la obligación de procurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, al igual que, intervenir ante las autoridades públicas, para defender el orden jurídico y el patrimonio público y la vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación, y la adopción inmediata de aquellas medidas que resulten necesarias para la protección y beneficio del espacio público a los funcionarios encargados de su custodia y administración¹.

Que, la norma consagrada en el artículo 29 de la Constitución Nacional y desarrollada por el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 establece que las actuaciones administrativas deben desarrollarse con fundamento en el respeto del ordenamiento jurídico, la adecuada motivación de las decisiones y la garantía de los derechos de los administrados.

Que, se ha buscado redactar justificando la finalidad histórica del Decreto 1678 de 1958 de preservar el carácter impersonal, institucional y objetivo de la función administrativa, evitando prácticas asociadas al culto a la personalidad o a la exaltación política de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. No obstante, la interpretación que ahora justifican para ir en contravía de esta disposición está en señalar que debe realizarse de manera sistemática y finalista, atendiendo a su propósito dentro del ordenamiento jurídico. Cuando el sentido o la prohibición prevista en el Decreto 1678 de 1958 se dirige principalmente a impedir que las oficinas públicas sean utilizadas como espacios de exaltación política o personal de funcionarios públicos, particularmente cuando ello implique la promoción de su propia imagen o la atribución de honores institucionales incompatibles con el principio de impersonalidad de función pública. Argumentando que dicha prohibición “en oficinas públicas” no puede interpretarse en el sentido de impedir la existencia de registros históricos de carácter institucional, tales como galerías históricas de exmandatarios o registros institucionales que documenten la sucesión de autoridades públicas en una determinada entidad territorial, cuando su finalidad sea preservar la memoria administrativa de la entidad y no exaltar la figura personal de un funcionario. Y,

Que, en consecuencia... una “interpretación razonable” del Decreto 1678 de 1958 permite concluir que la existencia de espacios institucionales destinados a documentar la sucesión histórica de autoridades públicas **no constituye, por si misma una vulneración de la prohibición histórica prevista en dicha norma; por tener una finalidad histórica, documental o institucional.**

Que, si bien el espacio institucional donde se encuentran ubicadas **dentro de las oficinas públicas** las imágenes o retratos de Exalcaldes, alcaldes o de otras Exautoridades, no constituye en los términos de la legislación cultural vigente, un bien patrimonial formalmente declarado, **si puede entenderse como una manifestación de la memoria institucional y administrativa del municipio.** Sustentados en el artículo 8 de la Constitución Nacional que establece la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales de la

¹ Resolución 017 marzo 4 de 2000, Artículo 18; Decreto 262 de 2000, numeral 1º, 5º y 8º artículo 24.

Nación, así como en el artículo 70 superior, que dispone que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura y de proteger el patrimonio cultural de la Nación.

Que, en desarrollo de estos mandatos constitucionales, la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- modificada por la Ley 1185 de 2008, estableció el régimen jurídico del patrimonio cultural de la Nación. En particular el artículo 4 de dicha Ley dispone que **el patrimonio cultural está constituido por los bienes materiales y las manifestaciones culturales que poseen especial interés histórico, testimonial o documental; los cuales constituyen expresión de la identidad cultural del país y deben ser objeto de salvaguardia, protección, conservación y divulgación por parte del Estado.**

Que, Teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas anteriormente expuestas, solicito con debido respeto se sirvan absolver la siguiente:

PETICIÓN:

PRIMERO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar si *“la prohibición existente de colocar en las oficinas públicas retratos de los funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente se pueda interpretar como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas o dichos funcionarios. Y que solo es permisivo la colocación de efigies de próceres o, cuando así lo haya dispuesto la ley, la de personas ilustres desaparecidas”* aún se encuentra vigente o si por el contrario la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- modificada por la Ley 1185 de 2008, que estableció el régimen jurídico del patrimonio cultural de la Nación, permitió, derogó, modificó o anuló lo establecido en el Decreto 1678 de 1958 sobre el particular.

SEGUNDO. - Solicito a su digno Despacho se sirva informar si para que en el territorio nacional se consagre la memoria de los grandes calores históricos en las instituciones oficiales que se dediquen al bien público y a **la formación y difusión de la cultura** se debe hacer caso omiso a lo enunciado en el mencionado Decreto 1678 de 1958 para que se mantenga el respeto por los monumentos, emblemas, símbolos que enaltezcan nuestra propia historia; o, buscar ordenar el retiro y la utilización de nombres extraños y/o rebuscados que no dan significado a nuestra propia historia en las Instituciones Oficiales establecidas para el bien público o bienes de uso público y para la formación y difusión de la cultura; con nombres que perpetúen la memoria de los grandes hombres desaparecidos o de los acontecimientos que hayan contribuido a la formación de la nacionalidad colombiana.

TERCERO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar si se debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en la Jurisdicción Nacional, la colocación de **retratos de los funcionarios en los edificios de las oficinas públicas**, lo mismo que cualquier clase de grabados o leyendas que directa o indirectamente se puedan interpretar como homenaje a los titulares o empleados de dichas oficinas o dichos funcionarios. O se pudieran permitir única y exclusivamente en los edificios dedicados a la

promoción y desarrollo **de la cultura**. O permitir realizar esa clase de homenajes y auto homenajes públicos en vida; O en su lugar, solo se autorice la colocación de efigies de próceres o, cuando así lo haya dispuesto la ley, la de personas ilustres desaparecidas.

CUARTO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿Puede un Ente Territorial en el nivel Nacional de manera particular ordenar preservar las imágenes o retratos de los mandatarios y exmandatarios locales a manera de “registro histórico institucional”, incluido el de los mismos mandatarios en ejercicio; so pretexto de destinar a documentar la sucesión de quienes han ejercido la primera magistratura del Ente Territorial?, ¿La anterior actuación se puede sustentar en la Ley de la Cultura? **En caso positivo:** ¿Qué requisitos se deben cumplir para formalizar esta pretensión y dónde está establecido? **En caso Negativo:** ¿Cuál es el procedimiento para evitar dicha pretensión?

QUINTO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿Cuál es el sustento legal que pudiera invocarse para la sujeción en edificios públicos de este cometido de homenajes públicos; en dichas normas Legales 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008?

SEXTO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: La disposición de dichas fotografías, retratos o imágenes de exfuncionarios y de los propios actuales mandatarios para ser ubicadas en murales para la posteridad de edificios públicos, ¿tendrían efectivamente un sustento como espacio institucional con fines históricos y documentales que no contrarían el Decreto 1678 de 1958, o, definitivamente no existe en la Ley de Cultura una disposición que se asemeje para permitirlo, y así sustentar esta pretensión como **registro histórico institucional** que permitan su ubicación libremente en cualquier entidad pública? Así sea dentro de las oficinas públicas.

SÉPTIMO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿La configuración de la anterior actuación resultaría contraria al ordenamiento jurídico vigente establecida en el Decreto 1678 de 1958 que requiere una intervención administrativa en materia de protección del espacio público o de cumplimiento de normas legales? O ¿existe norma dentro de la ley de Cultura procedente para autorizarlo? ¿Dónde está señalado? Y si ya se EXHORTÓ en el Memorando 10 de 2020 **(ANEXO)**, ¿que amerita su incumplimiento?

OCTAVO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿Basta atender la finalidad normativa orientada a evitar prácticas de exaltación personal o culto a la personalidad en el ejercicio de la función pública, aunque se realicen Actos de manera solemne como Homenaje a los exfuncionarios y actuales mandatarios presentes y se hagan grandes inversiones económicas para atender con homenaje a los invitados?

NOVENO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: Para obviar el mandato del **Decreto 1678 de 1958** en la prohibición de colocar en las oficinas públicas retratos del presidente de la república o de otros funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente pueda interpretarse como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación, o a dichos funcionarios; ¿Se puede obviar esa prohibición con la **Ley de Cultura** argumentando buscar una finalidad de **preservar la memoria administrativa del Ente Territorial** y permitir el reconocimiento de la **evolución institucional del Ente Territorial** y NO la exaltación personal ni homenaje

institucional prohibido por el ordenamiento jurídico incompatible con el principio de impersonalidad de la función pública? Si esta Ley no lo permite, ¿cuál norma vigente SI lo permite?

DÉCIMO. - Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿Es legal y procedimental que se establezca en esta clase de homenajes públicos para la ubicación de imágenes o retratos de los exmandatarios locales o de otros exfuncionarios, incluidos los actuales mandatarios para la existencia legal de registros institucionales que permitan documentar la sucesión de autoridades públicas en cualquier Entidad Territorial y puedan orientarse a una práctica legítima orientada a preservar la memoria administrativa del Estado para que NO riña con el Decreto 1678 de 1958?

UNDÉCIMO. - Finalmente, analizado el asunto solicitado: Solicito a su digno Despacho se sirvan informar: ¿Se pudiera estar configurando la existencia de alguna actuación contraria al Ordenamiento Jurídico vigente que pudiera hacer necesario obviar ese proyecto de ubicación en las oficonas públicas de imágenes o retratos de los exalcaldes u otros exfuncionarios, incluidos los actuales mandataarios en cualquier Ente Territorial del país en murales públicos, dentro de edificios públicos; para sustentar el Espacio Institucional en las Oficinas Públicas de cualquier Ente Territorial del país? O ¿Sería necesario revertir, anular o suspender el procedimiento por la ilegalidad que conlleva?

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Que, en el DECRETO 2759 del 14 de Noviembre de 1997: *“Por el cual se modifica el artículo 5° del Decreto 1678 de 1958”*; el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, señaló:

Artículo 1o. El artículo quinto (5o) del Decreto 1678 de 1958 quedará así:

"Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y Alcaldes quedan encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales.

Igualmente, prohibase la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.

Parágrafo Único. *Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la persona epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación."*

Artículo 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase. Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 14 de noviembre de 1997. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Que, en el DECRETO 2987 del 6 de Diciembre de 1945: *“Por el cual se determinan los nombres que en lo sucesivo deben llevar las instituciones destinadas al bien público y a la*

formación y difusión de la cultura.”; el Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, DECRETA:

“ARTÍCULO ÚNICO. *Las instituciones oficiales que en lo sucesivo se creen para el bien público, para la formación y difusión de la cultura, deberán llevar nombres que perpetúen la memoria de los grandes hombres desaparecidos o de los acontecimientos que hayan contribuido a la formación de la nacionalidad colombiana”.* (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Que, en el DECRETO 1678 del 30 de Agosto de 1958: **“Por el cual se reglamenta el artículo 340 de la ley 4a. de 1913, y se dictan otras disposiciones.”**; el Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 120 de la Constitución Nacional, DECRETA:

ARTÍCULO. 1º. - *A partir de la vigencia del presente decreto prohibase colocar en las oficinas públicas retratos del Presidente de la República o de otros funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente pueda interpretarse como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación, o a dichos funcionarios. En las oficinas públicas solamente podrán colocarse efigies de próceres o, cuando así lo haya dispuesto la ley, la de personas ilustres desaparecidas.*

ARTÍCULO. 2º. - *En lo sucesivo, el Presidente de la República y los demás empleados al servicio de la nación, sea cual fuere el orden jerárquico que establecen la Constitución y leyes de la república, recibirán el tratamiento que corresponda a la denominación del cargo que desempeñen sin anteponer ningún adjetivo, a excepción de señor y usted, según el caso.*

ARTÍCULO. 3º. - *Ningún funcionario público podrá usar en su correspondencia o tarjetas personales la bandera o el escudo de la república.*

ARTÍCULO. 4º. *La oficina de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores elaborará una reglamentación especial para la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos segundo y tercero del presente decreto.*

ARTÍCULO 5º. - *Modificado por el Decreto 2759 de 1997 Los ministros del despacho, gobernadores, intendentes, comisarios y alcaldes quedan encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, para prohibir en adelante la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la nación, a los departamentos, intendencias, comisarías, municipios o a entidades oficiales o semioficiales.*

Igualmente prohibase la colocación de placas, o leyendas, o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del congreso.

ARTÍCULO. 6º. - *El presente decreto rige desde la fecha de su expedición.* (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Que, en el MEMORANDO N°10 del 16 de octubre de 2020 (**ANEXO**), el PROCURADOR DELEGADO PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES; a el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DEL INTERIOR; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES; MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO; MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; MINISTERIO DE TRABAJO; MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES; MINISTERIO DE TRANSPORTE; **MINISTERIO DE CULTURA; GOBERNACIONES; ALCALDÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES; ENTIDADES OFICIALES Y SEMIOFICIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LA DISPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN EL ESPACIO Y BIENES DE USO PÚBLICO; Y OTROS².

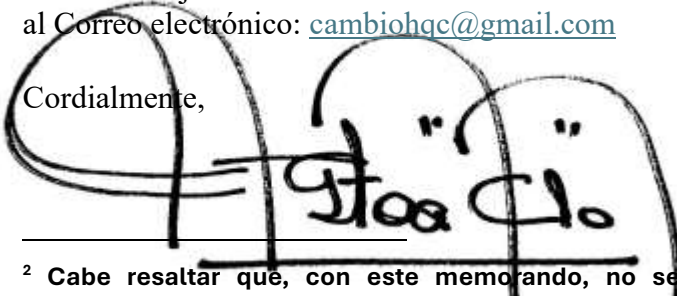
FECHA: 16 De Octubre de 2020

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, y lo dispuesto en los numerales 1°, 5° y 8° del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 18 de la Resolución 017 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en ejercicio de la vigilancia superior, con fines preventivos y de control de gestión en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la defensa del orden público, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos, expide el presente memorando con el propósito de exhortar a los destinatarios del presente, a la debida observancia y cumplimiento del ordenamiento jurídico y la disposición del espacio público.

NOTIFICACIÓN

Las recibiré junto a sus anexos en la Carrera 12 No. 10-66 Piso 3 de Chía, Cundinamarca y/o al Correo electrónico: cambiohqc@gmail.com

Cordialmente,

A large, stylized handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Stoa Cio' with a large, looping initial 'S' on the left and 'Cio' on the right. There are some additional marks above the 'Cio' part, possibly 'r' and 'i'.

² Cabe resaltar que, con este memorando, no se está solicitando información sobre las actuaciones adelantadas previas a este documento, sino que, se pide que se tomen medidas competentes y pertinentes con el fin de acatar lo preceptuado por las normas citadas en el presente memorando. Memorando 10 de 2020 – Folio 4 de 5.

Por último, es necesario precisar que el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público frente a sus obligaciones, pueden constituir una falta disciplinaria de conformidad a la Ley 734 de 2002. Memorando 10 de 2020 – Folio 5 de 5.

HERNANDO QUINTANA CAMACHO
C.C. No. 80.397.663 de Chía, Cundinamarca
e-mail: cambiohq@gmail.com
Celular: 3219239939



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

MEMORANDO N°10

DE: PROCURADOR DELEGADO PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; MINISTERIO DEL INTERIOR; MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES; MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO; MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; MINISTERIO DE TRABAJO; MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES; MINISTERIO DE TRANSPORTE; MINISTERIO DE CULTURA; GOBERNACIONES; ALCALDÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES; ENTIDADES OFICIALES Y SEMIOFICIALES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LA DISPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN EL ESPACIO Y BIENES DE USO PÚBLICO; Y OTROS.

FECHA:16 De Octubre de 2020

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, y lo dispuesto en los numerales 1°, 5° y 8° del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 18 de la Resolución 017 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en ejercicio de la vigilancia superior, con fines preventivos y de control de gestión en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la defensa del orden público, el patrimonio público, las garantías y los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y colectivos, expide el presente memorando con el propósito de exhortar a los destinatarios del presente, a la debida observancia y cumplimiento del ordenamiento jurídico y la disposición del espacio público.

Mediante derecho de petición interpuesto ante el Ministerio Público, se solicitó el cumplimiento de las funciones instituidas con el fin de requerir la debida observancia a las normas traídas a colación, por los representantes del Estado a nivel Nacional y territorial.

Es de señalar, que numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece como deber de todo servidor público, el *“Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los*

Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales

Carrera 5ª No 15-80 Piso 17 Pbx 5878750 Ext 11702-11736-11797

www.procuraduria.gov.co – asuntoscivilesylaborales@procuraduria.gov.co



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. (...) Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código”.

Por lo anterior, se encuentra que, el artículo único del Decreto 2987 del 6 de diciembre de 1945, *“Por el cual se determinan los nombres que en lo sucesivo deben llevar las instituciones destinadas al bien público y a la formación y difusión de la cultura”*, dispone:

“Las instituciones oficiales que en lo sucesivo se creen para el bien público, para la formación y difusión de la cultura, deberán llevar nombres que perpetúen la memoria de los grandes hombres desaparecidos o de los acontecimientos que hayan contribuido a la formación de la nacionalidad colombiana.”

Por su parte, el Decreto 1678 del 30 de agosto de 1958, *“Por el cual se reglamenta el artículo 340 de la Ley 4ª de 1913 y se dictan otras disposiciones”*, prescribe que:

“Artículo 1º. A partir de la vigencia del presente decreto prohíbese colocar en las oficinas públicas retratos del presidente de la república o de otros funcionarios públicos, lo mismo que cualquier grabado o leyenda que directa o indirectamente pueda interpretarse como homenaje de los titulares o empleados de dichas oficinas al primer mandatario de la nación, o a dichos funcionarios. En las oficinas públicas solamente podrán colocarse efigies de próceres o, cuando así lo haya dispuesto la ley, la de personas ilustres desaparecidas.

Artículo 2º. En lo sucesivo, el presidente de la república y los demás empleados al servicio de la nación, sea cual fuere el orden jerárquico que establecen la Constitución y leyes de la república, recibirán el tratamiento que corresponda a la denominación del cargo que desempeñen sin anteponer ningún adjetivo, a excepción de señor y usted, según el caso.

Artículo 3º. Ningún funcionario público podrá usar su correspondencia o tarjetas personales la bandera o el escudo de la república.

Artículo 4º. La oficina de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores elaborará una reglamentación especial para la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos segundo y tercero del presente decreto.

Artículo 5º. (Modificado por el Decreto 2759 de 1997) Los Ministerios del Despacho, Gobernadores y Alcaldes quedan

Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales

Carrera 5ª No 15-80 Piso 17 Pbx 5878750 Ext 11702-11736-11797

www.procuraduria.gov.co – asuntoscivilesylaborales@procuraduria.gov.co



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

encargados de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente para prohibir en adelante la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales.

Igualmente, prohíbase la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.

Parágrafo Único. Las autoridades antes indicadas podrán designar con el nombre de personas vivas los bienes de uso público a petición de la comunidad y siempre que la persona epónima haya prestado servicios a la Nación que ameriten tal designación.’ ”

Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en atención a las funciones misionales encomendadas, encuentra que la Constitución Política de Colombia, al igual que los deberes establecidos para los funcionarios públicos¹, establecen para los destinatarios del presente memorando, el debido cumplimiento de la Carta Magna, las leyes, los decretos del gobierno, las ordenanzas de las Asambleas Departamentales, y los acuerdos de los Concejos Municipales².

De igual manera, en atención a las normas traídas a colación, determinan para el espacio y bienes de uso público, incluidos sitios y obras de propiedad de las entidades, el debido cumplimiento de lo ordenado para denominar los mismos en carácter de reconocimiento, prohibiéndose la designación a personas vivas o funcionario públicos en ejercicio, incluso el Presidente de la República, extendiéndose a la disposición de retratos, placas, leyendas o monumentos que recuerden la participación de los mismos o su reminiscencia, salvo las excepciones que de manera taxativa exponen las normas citadas en el presente memorando.

Se destaca que el espíritu de las normas traídas a colación, buscan el reconocimiento y perpetuar la memoria de las grandes mujeres y hombres desaparecidos que contribuyeron a la formación de la nacionalidad colombiana, al igual que hechos históricos que marcaron nuestro país de manera positiva, en el mismo sentido.

Ahora bien, en cuanto al tratamiento que se le da a los funcionarios públicos y la utilización de los símbolos patrios, corresponde por mandato legal al Ministerio de Relaciones Exteriores, expedir, implementar y socializar el reglamento correspondiente para las disposiciones en particular, de conformidad con lo

¹ Ley 734 de 2002, numeral 1º del artículo 34

² Constitución Política de Colombia, Numeral 1º Artículo 305 y Numeral 1º Artículo 315.



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

preceptuado en el artículo 4º del Decreto 1678 del 30 de agosto de 1958, antes citado.

Es preciso señalar, que la Procuraduría General de la Nación, sus Procuradurías Delegadas y Territoriales, al igual que sus funcionarios, como órgano de control no coadministra la gestión pública; pero, este Despacho, en atención a las funciones adscritas, tiene la obligación de procurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, al igual que, intervenir ante las autoridades públicas, para defender el orden jurídico y el patrimonio público y la vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación, y la adopción inmediata de aquellas medidas que resulten necesarias para la protección y beneficio del espacio público a los funcionarios encargados de su custodia y administración³.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en ejercicio de la función de preventiva y de control de gestión encomendada por el artículo 18 de la Resolución 017 de 2000, **EXHORTA** a los destinatarios del presente memorando, para que, en ejercicio de sus funciones, atribuciones y obligaciones constitucionales y legales, dentro de sus competencias:

- I. Ejecutar las medidas administrativas, competentes y pertinentes, con el fin de dar estricto cumplimiento a las normas traídas a colación en el presente memorando.
- II. Implementar acciones administrativas competentes, con el fin de reconocer a personajes ilustres fallecidos que contribuyeron a la formación de la nacionalidad colombiana, al igual que hechos históricos que marcaron nuestro país de manera positiva en el mismo sentido, en la determinación del espacio y bienes de uso público, e instituciones oficiales creadas para la formación y difusión de la cultura.
- III. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, expedir, implementar y socializar el reglamento especial para el tratamiento que corresponda a la denominación del cargo que desempeñen los funcionarios públicos, y la utilización de los símbolos patrios.
- IV. Desde las Gobernaciones y Alcaldías Distritales y Municipales, en atención a las funciones de primera autoridad administrativa de la entidad territorial, dar alcance a las corporaciones públicas (Asambleas y Concejos), y a las entidades oficiales y semioficiales del orden Departamental, Distrital y Municipal, del presente memorando.

Cabe resaltar que, con este memorando, no se está solicitando información sobre las actuaciones adelantadas previas a este documento, sino que, se pide que se tomen medidas competentes y pertinentes con el fin de acatar lo preceptuado por las normas citadas en el presente memorando.

³ Resolución 017 marzo 4 de 2000, Artículo 18; Decreto 262 de 2000, numeral 1º, 5º y 8º artículo 24.



PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES Y LABORALES

Por último, es necesario precisar que el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público frente a sus obligaciones, pueden constituir una falta disciplinaria de conformidad a la Ley 734 de 2002.

Atentamente,

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA
Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales